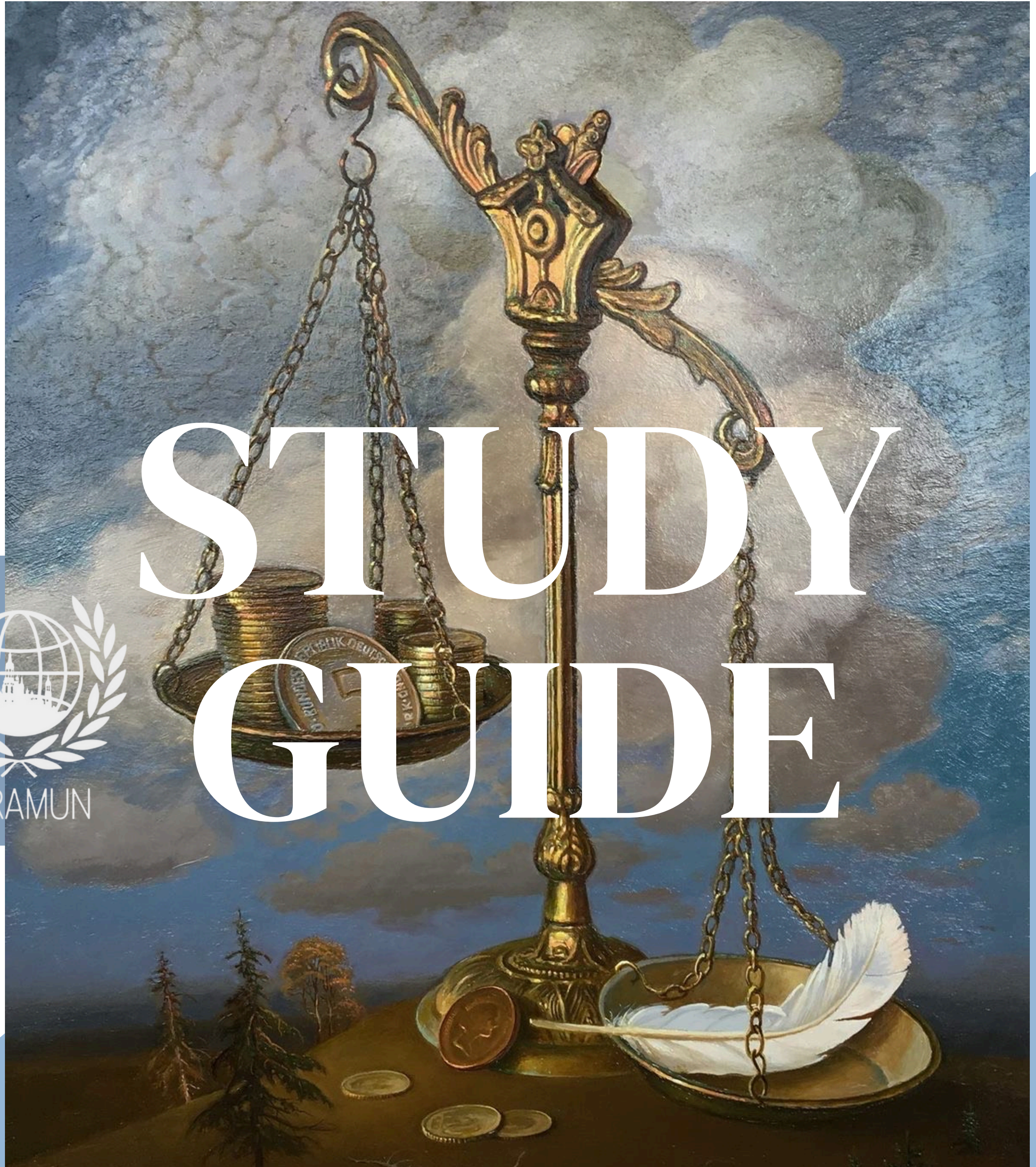


ZARAMUN 2025

"Los dilemas de la humanidad: fronteras, justicia y ética; construir el futuro del mundo."



UNHRC

Abordar los desafíos de la corrupción en los países de América Latina: promover la integridad en los cuerpos de seguridad y los sistemas de justicia penal.

INTRODUCCIÓN DEL COMITÉ

Es un honor recibirlos en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC), una entidad dedicada a salvaguardar los derechos humanos. Hoy nos congregamos con el objetivo de enfrentar una pregunta de suma relevancia: ¿De qué manera pueden afrontarse los desafíos que plantea la corrupción en los países de América Latina para fomentar la integridad en los cuerpos de seguridad y en los sistemas de justicia penal?

INTRODUCCIÓN DEL TEMA

En Latinoamérica, la corrupción ha debilitado la integridad de las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia penal, poniendo en riesgo su capacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Desde estrategias de coacción hasta sistemas de impunidad, estas acciones debilitan la gobernabilidad, limitan el acceso a la justicia y perpetúan violaciones de los derechos humanos.

Delegados, el objetivo de este debate es claro: sus elecciones deben enfocarse en diseñar estrategias para fortalecer la integridad en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Estas acciones tienen como misión restaurar la confianza del pueblo, reducir la impunidad y garantizar que nuestras instituciones sean protectoras, no infractoras, de los derechos humanos.

CONTEXTO HISTÓRICO Y ACTUAL

La corrupción en América Latina tiene orígenes profundos que se remontan al periodo colonial, cuando las estructuras sociales y políticas fomentaron la acumulación de poder y recursos. Este patrón se mantuvo vigente durante las dictaduras militares del siglo XX, que implementaron prácticas corruptas como mecanismo de control político. En las últimas décadas, el crecimiento de los cárteles de drogas ha agravado el problema, infiltrándose en las fuerzas de seguridad, los sistemas judiciales y los gobiernos locales.

Es preocupante el impacto de la corrupción en los derechos humanos. Esta conducta perpetúa la impunidad, limita el acceso a la justicia, fomenta la violencia e impacta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como las mujeres, las comunidades originarias y aquellas en condiciones de pobreza. La falta de transparencia en las acciones institucionales reduce la confianza ciudadana y socava el estado de derecho.

Las estadísticas recientes confirman la magnitud del problema. Según Transparencia Internacional, América Latina registra una calificación media de 43/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que refleja altos niveles de desconfianza. Además, se estima que la corrupción representa un gasto equivalente al 5 % del PIB regional, afectando directamente el progreso económico y social.

#1 INFILTRACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

En ciertas naciones de América Latina, los cárteles y otras redes criminales han conseguido infiltrarse en las fuerzas de seguridad, agravando así la crisis de corrupción. Estas organizaciones delictivas sobornan o intimidan a los oficiales para que operen en su beneficio, poniendo en riesgo total la habilidad de estas instituciones para salvaguardar a la población. Esta infiltración no solo otorga a los delincuentes más libertad de acción, sino que también debilita la fe pública en las autoridades.

#3 CORRUPCIÓN EN LA POLICIA Y EN EL PODER JUDICIAL

Los episodios de sobornos, extorsión y exceso de autoridad en el área policial y judicial son otro asunto de gran importancia. Estas acciones provocan que la justicia sea insuficiente y, en numerosas situaciones, inaccesible, en particular para las comunidades más desprotegidas. Cuando los encargados de asegurar la justicia y la seguridad actúan en provecho personal o de grupos corruptos, el estado de derecho se desvanece y las infracciones a los derechos humanos se intensifican.

#2 IMPUNIDAD Y DESCRÉDITO DEL SISTEMA JUDICIAL

La impunidad representa otro enorme reto, con índices alarmantes altos en numerosos países de la región. Esto implica que la mayor parte de los delitos no se investigan o no se penalizan, dejando a las víctimas sin justicia. Esta ausencia de repercusiones promueve la desconfianza de la población en el sistema de justicia y establece un ciclo en el que los individuos se perciben como vulnerables frente a las injusticias.



ESTUDIOS DE CASO Y EJEMPLOS

#1 CASO EN MÉXICO

El narcotráfico ha tenido un impacto significativo en las fuerzas de seguridad en México. La violencia y la corrupción han debilitado la capacidad de las fuerzas de seguridad para combatir eficazmente el crimen organizado. La infiltración de narcotraficantes en las instituciones de seguridad ha llevado a la corrupción de agentes y oficiales, lo que ha dificultado los esfuerzos por erradicar el narcotráfico.

En respuesta, el gobierno mexicano ha implementado varias medidas para combatir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Estas medidas incluyen la creación de unidades especializadas para investigar y procesar casos de corrupción, así como la implementación de programas de capacitación y evaluación para los agentes de seguridad. Además, se han establecido mecanismos de supervisión y control para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones de seguridad.

A pesar de estos esfuerzos, la lucha contra la corrupción sigue siendo un desafío considerable. La corrupción profunda y la falta de recursos suficientes han dificultado la implementación efectiva de estas medidas. Sin embargo, la continuidad de estos esfuerzos es crucial para mejorar la seguridad y la justicia en México.

#2 CASO EN BRASIL Y TODA AMERICA LATINA

La Operación Lava Jato es una de las investigaciones anticorrupción más grandes y significativas en la historia de Brasil y América Latina. Comenzó en 2014 y reveló un esquema masivo de corrupción que involucraba a políticos, empresarios y funcionarios públicos.

La operación llevó a la condena de numerosos políticos de alto perfil, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero. Además de políticos, la operación también implicó a empresarios y funcionarios de alto nivel. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora Odebrecht, fue uno de los principales acusados. El escándalo no se limitó a Brasil. Empresas brasileñas involucradas en el esquema de sobornos también operaban en otros países de América Latina.

La operación logró recuperar miles de millones de dólares desviados de Petrobras y otros fondos públicos. La magnitud del escándalo impulsó reformas en las leyes anticorrupción y en la transparencia gubernamental en Brasil.

La Operación Lava Jato no solo expuso la corrupción en Brasil, sino que también tuvo un impacto duradero en la política y la justicia del país, llevando a una mayor conciencia y a esfuerzos continuos para combatir la corrupción.

#3 CASO EN EL SALVADOR

La corrupción en las fuerzas de seguridad de El Salvador ha sido un problema persistente. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha permitido que ciertos miembros de las fuerzas de seguridad se involucren en actividades ilegales y colaboraciones con pandillas. Esto ha debilitado la confianza pública en las instituciones de seguridad y ha dificultado los esfuerzos para combatir la violencia y el crimen organizado.

La MS-13, una de las pandillas más violentas y extendidas en El Salvador, ha establecido vínculos con algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Estos vínculos han facilitado actividades delictivas y han complicado los esfuerzos para desmantelar la pandilla. La infiltración de pandillas en las instituciones de seguridad es un desafío considerable que requiere una respuesta robusta y coordinada por parte del gobierno.

El gobierno de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, ha implementado varias políticas para abordar el problema de las pandillas y la corrupción. Una de las medidas más destacadas ha sido el establecimiento de un "régimen de excepción", que permite la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales para combatir la violencia y el crimen organizado. Sin embargo, esta medida ha sido controvertida debido a preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia en su implementación.

Además, el gobierno ha llevado a cabo operativos masivos para detener a miembros de pandillas y ha promovido reformas en las fuerzas de seguridad para mejorar su eficacia y reducir la corrupción. A pesar de estos esfuerzos, el desafío sigue siendo significativo y requiere una combinación de medidas de seguridad, justicia y desarrollo social para lograr un impacto duradero.

ACTORES CLAVE Y POSICIONES DE LOS PAÍSES

#1 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA

- México: **Política Nacional Anticorrupción (PNA)** aprobada en 2020. Esta política busca combatir la corrupción y la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, y promover la mejora de la gestión pública. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos como la falta de recursos y la resistencia institucional.
- Colombia: **Ley de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad**. Esta ley establece mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. A pesar de estos esfuerzos, la corrupción sigue siendo un problema significativo debido a la falta de cumplimiento y la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
- Brasil: **Ley Anticorrupción** y ha fortalecido su sistema judicial para combatir la corrupción. La Operación Lava Jato es un ejemplo destacado de los esfuerzos exitosos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema debido a la corrupción política y la falta de transparencia en algunos sectores.
- Perú: **Ley de Ética y Transparencia**. Estas reformas buscan mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos como la falta de recursos y la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
- Haití: **Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS)**. La situación es tan grave que el sistema judicial y las autoridades locales han perdido el control efectivo de muchas áreas, y la economía y el suministro de ayuda humanitaria han sido paralizados. La comunidad internacional, incluyendo la ONU y varios países, ha intervenido para intentar estabilizar la situación, pero los desafíos siguen siendo enormes.

Resumiendo, aunque estos países han implementado políticas anticorrupción significativas, enfrentan desafíos en la implementación debido a la falta de recursos, la resistencia institucional y la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

#2 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ONG:

Transparencia Internacional (TI): organización no gubernamental que se dedica a prevenir y combatir la corrupción a nivel mundial. Publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), promueve políticas de anticorrupción ayudando a gobiernos, empresas y sociedad civil. Además, la organización realiza campañas para educar al público sobre los efectos de la corrupción y cómo combatirla.

Organización de Estados Americanos (OEA): organización regional que promueve la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe. La OEA apoya la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos de la región, proporciona asesoramiento y capacitación a los estados miembros para fortalecer sus instituciones anticorrupción. Y, la OEA facilita la cooperación entre los países para combatir la corrupción transnacional.

Human Rights Watch (HRW): organización que defiende los derechos humanos a nivel mundial. La HRW realiza investigaciones sobre casos de corrupción que afectan los derechos humanos y publica informes detallados. Además de que ejerce presión sobre los gobiernos y otras entidades para que tomen medidas contra la corrupción.

#3 LA SOCIEDAD CIVIL

Los medios de comunicación realizan investigaciones profundas para exponer casos de corrupción. Un ejemplo notable es el trabajo de periodistas de investigación que descubrieron el escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil.

Los activistas organizan campañas para educar al público sobre los efectos de la corrupción y movilizar a las personas para que tomen acción. Por ejemplo, en México, organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) trabajan para exponer y combatir la corrupción. También el movimiento #YoSoy132 en México, que surgió para demandar transparencia y democracia.

MARCOS JURÍDICOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC): La corrupción en América Latina ha sido un obstáculo significativo para el desarrollo económico y social. La UNCAC proporciona un marco integral para abordar estos problemas, promoviendo la cooperación internacional y estableciendo normas y medidas para prevenir y combatir la corrupción. La convención también enfatiza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual es crucial para fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC): tratado adoptado por los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1996. Su objetivo principal es prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos específicamente vinculados con tal ejercicio.

La CICC también establece el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), que analiza los marcos jurídicos e institucionales de los Estados miembros y proporciona recomendaciones para mejorarlos.

LEYES NACIONALES ANTICORRUPCIÓN

México: **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública** de 2002, tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información pública y promover la transparencia en la gestión pública. Esta ley permite a los ciudadanos solicitar información de cualquier entidad pública y obliga a estas entidades a responder en un plazo determinado.

Colombia: **Reformas judiciales** que ayudan a fortalecer la independencia y eficiencia del sistema judicial. Estas reformas incluyen la creación de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, así como la implementación de mecanismos de control y supervisión para prevenir la corrupción dentro del poder judicial.

Brasil: **Código Penal y Ley de Responsabilidad Penal de los Funcionarios Públicos**, esto establece sanciones para los funcionarios públicos que participan en actos de corrupción y promueven la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.

CONCLUSION

Finalmente, recordamos que el propósito de la resolución es de garantizar la seguridad y protección en la vida de los civiles. Además de establecer lineamientos para fortalecer la integridad en el sistema de justicia y los cuerpos de seguridad de todos los países afectados, buscando así una colaboración internacional para luchar contra esta criminalidad y corrupción.

RECURSOS ADICIONALES

Fuentes Recomendadas: Transparencia Internacional, informes de la ONU, y reportes de la OEA sobre corrupción en América Latina.

- <https://www.transparency.org/es/press/summit-of-the-americas-transparency-international-calls-for-rescue-of-lima-anti-corruption-commitments>
- <https://www.transparency.org/es/press/organisation-of-american-states-fighting-inequality-and-discrimination-requires-decisive-action-against-corruption>
- <https://www.transparency.org/es/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent>
- <https://www.transparency.org/es/press/2022-corruption-perceptions-index-cycle-corruption-organised-crime-instability-americas>
- <https://www.unodc.org/colombia/es/convenciononu.html>
- <https://news.un.org/es/story/2023/12/1526392>

- <https://www.unodc.org/ropan/es/combate-a-la-delincuencia-organizada-transnacional.html>
- <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/informes/pais.asp>

El mapa del crimen en América Latina

Homicidios voluntarios por cada 100.000 personas en Latinoamérica en 2015*

